



202218450255

De: Notificaciones Judiciales Interno <buzonjudicialinterno@colpensiones.gov.co>
Enviados: jueves, 15 de diciembre de 2022 12:39:59 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco
Para: Radicacion Judicial 1 <radicacionjudicial1@syc.com.co>
Asunto: Fwd: NOTIFICACION RADICACION DEMANDA DEMANDA CONFORME AL ARTICULO 103, 109 Inc2 y 112 Inc 3 D

DMNDA

----- Forwarded message -----

De: Yesid Vega <yesid.vega@tgconsultores.net>

Date: jue, 15 dic 2022 a las 11:31

Subject: NOTIFICACION RADICACION DEMANDA DEMANDA CONFORME AL ARTICULO 103, 109 Inc2 y 112 Inc 3 DEL CGP.

To: NOTIFICACIONESJUDICIALES@COLPENSIONES.GOV.CO <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>, notificacionesjudiciales@porvenir.com.co <notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>, Buzon ProcesosJudiciales <PROCESOSJUDICIALES@colfondos.com.co>, Natalia Andrea Sepulveda Ruiz <ACCIONESLEGALES@proteccion.com.co>

Señor
JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA (REPARTO)
E.S.D.

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO CONTRA COLPENSIONES, LA AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS, LA AFP COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA AFP ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.

YESID MAURICIO VEGA PEÑA, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, abogado en ejercicio, identificado con CC. No. 80.009.582 de Bogotá, y portador de la T.P. No. 216996 del C. S. de la J., obrando como apoderado del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de BOGOTÁ, identificado con CC. No. 4.280.283 de TOCA, según facultades otorgadas por el poder a mi conferido, presento ante usted **DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**, conforme a los requisitos que establece el artículo 25 del C.P.T. y S.S., modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, así:

1. NOMBRE DE LAS PARTES (NUMERAL 2, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

PARTE DEMANDANTE:

- **LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO C.C. No. 4.280.283 de BOGOTÁ.**

PARTE DEMANDADA:

- **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, empresa industrial y comercial del estado, cuyo domicilio principal es en esta ciudad, representado para estos efectos por su presidente el Dr. MAURICIO OLIVERA GONZALEZ, o por quien haga sus veces al momento de la notificación. CORREO ELECTRONICO notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
- **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.** representado legalmente por su presidente, MIGUEL LARGACHA MARTINEZ, que designo la Junta Directiva, según consta en sitio web: www.porvenir.com.co
- **COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS** representado legalmente por su presidente, ALAIN ENRIQUE ALFONSO FOUCRIER VIANA, que designo la Junta Directiva, según consta en sitio web: www.COLFONDOS.com.co Correo electrónico: jemartinez@colfondos.com.co

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. representado legalmente por su

2. DOMICILIO Y/O DIRECCION DE LAS PARTES (NUMERAL 3, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

PARTE DEMANDANTE:

- Domiciliado en la CALLE 137 A # 73 -71 en BOGOTA.

PARTE DEMANDADA:

- **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES:** Con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca en la Carrera 10 No. 72 - 33 Torre B Piso 11 | PBX [057] +1 217 0100. CORREO ELECTRONICO notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
- **A.F.P. PORVENIR** en la Carrera 13 No. 26 A – 65, de la ciudad de Bogotá. CORREO ELECTRONICO notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
- **COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS** en la Calle 67 No. 7 - 94 Pisos 3, 6, 10, 11, 14 al PH, de la ciudad de Bogotá. Correo electrónico: jemartinez@colfondos.com.co
- **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.** en la Calle 49 No. 63 - 100, de la ciudad de Medellín Antioquia. accioneslegales@proteccion.com.co

3. DOMICILIO Y/O DIRECCION DEL APODERADO DEL DEMANDANTE (NUMERAL 4, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

APODERADO DEL ACTOR: Con domicilio en la Carrera 4 # 35 - 66 Torre 3 Apto 102 Barrio Mesopotamia, en la ciudad de Tunja - Boyacá . Celular: 3183309956 y correo electrónico: yesid.vega@tgconsultores.net. maurovp1007@hotmail.com

4. CLASE DE PROCESO (NUMERAL 5, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

Por la naturaleza de la acción y la cuantía de las pretensiones, se trata de un PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA.

Señor

JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA (REPARTO)

E.S.D.

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO CONTRA COLPENSIONES, LA AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS, LA AFP COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA AFP ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.

YESID MAURICIO VEGA PEÑA, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, abogado en ejercicio, identificado con CC. No. 80.009.582 de Bogotá, y portador de la T.P. No. 216996 del C. S. de la J., obrando como apoderado del señor **LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de BOGOTA, identificado con CC. No.. 4.280.283 de TOCA, según facultades otorgadas por el poder a mi conferido, presento ante usted **DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**, conforme a los requisitos que establece el artículo 25 del C.P.T. y S.S., modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, así:

1. NOMBRE DE LAS PARTES (NUMERAL 2, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

PARTE DEMANDANTE:

- **LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO C.C. No. 4.280.283 de BOGOTA.**

PARTE DEMANDADA:

- **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, empresa industrial y comercial del estado, cuyo domicilio principal es en esta ciudad, representado para estos efectos por su presidente el Dr. MAURICIO OLIVERA GONZALEZ, o por quien haga sus veces al momento de la notificación. CORREO ELECTRONICO notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
- **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.** representado legalmente por su presidente, MIGUEL LARGACHA MARTINEZ, que designo la Junta Directiva, según consta en sitio web: www.porvenir.com.co

COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS representado legalmente por su presidente, ALAIN ENRIQUE ALFONSO FOUCRIER VIANA, que designo la Junta Directiva, según consta en sitio web: www.COLFONDOS.com.co Correo electrónico: jemartinez@colfondos.com.co

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. representado legalmente por su presidente, JUAN DAVID CORREA SOLÓRZANO, que designo la Junta Directiva, según consta en sitio web: www.PROTECCION.com.co

2. DOMICILIO Y/O DIRECCION DE LAS PARTES (NUMERAL 3, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

PARTE DEMANDANTE:

- Domiciliado en la CALLE 137 A # 73 -71 en BOGOTA.

PARTE DEMANDADA:

- **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES:** Con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca en la Carrera 10 No. 72 - 33 Torre B Piso 11 | PBX [057] +1 217 0100. CORREO ELECTRONICO notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
- **A.F.P. PORVENIR** en la Carrera 13 No. 26 A – 65, de la ciudad de Bogotá. CORREO ELECTRONICO notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
- **COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS** en la Calle 67 No. 7 - 94 Pisos 3, 6, 10, 11, 14 al PH, de la ciudad de Bogotá. Correo electrónico: jemartinez@colfondos.com.co
- **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.** en la Calle 49 No. 63 - 100, de la ciudad de Medellín Antioquia. accioneslegales@proteccion.com.co

3. DOMICILIO Y/O DIRECCION DEL APODERADO DEL DEMANDANTE (NUMERAL 4, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

APODERADO DEL ACTOR: Con domicilio en la Carrera 4 # 35 - 66 Torre 3 Apto 102 Barrio Mesopotamia, en la ciudad de Tunja - Boyacá . Celular: 3183309956 y correo electrónico: yesid.vega@tgconsultores.net. maurovp1007@hotmail.com

4. CLASE DE PROCESO (NUMERAL 5, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

Por la naturaleza de la acción y la cuantía de las pretensiones, se trata de un PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA.

5. PRETENSIONES (NUMERAL 6 ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

DECLARATIVAS

5.1. Declarar la ineficacia de la afiliación en pensión realizada por el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, al **Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad**, a través de la vinculación efectuada a la A.F.P. **PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, para el año 1995.

5.2. Como consecuencia de la declaratoria de ineficacia determinar que todas las afiliaciones posteriores que hubiere efectuado el demandante en el RAIS carecen de validez jurídica.

5.3. Declarar que el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, se encuentra válidamente afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES.

CONDENATORIAS

5.4. Condenar a la **A.F.P. PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, a registrar en el sistema de información que la Afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, estuvo viciada de nulidad por error de hecho que vicio el consentimiento o ineficacia.

5.5. Condenar a la **A.F.P. COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, a registrar en el sistema de información que la Afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, estuvo viciada de nulidad por error de hecho que vicio el consentimiento o ineficacia.

5.6. Condenar a la **A.F.P. LA A.F.P. PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS.**, como la administradora de pensiones actual en la que se encuentra afiliado el demandante, a trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones, la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del demandante incluidos los rendimientos y gastos de administración a que hubiere lugar.

5.7. Condenar a la **Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES**, a activar la afiliación en pensión del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, identificado con C.C. No. 4.280.283 .

5.8. Condenar a la Administradora Colombiana de pensiones – COLPENSIONES a actualizar en la historia laboral del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO las cotizaciones efectuadas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

5.9. Condenar a la parte demandada sobre los demás derechos que resulten probados conforme a las facultades ultra y extra petita.

5.10. Condenar a la parte demandada al pago de las costas y agencias en derecho que se causen con ocasión de este proceso.

6. HECHOS Y/U OMISIONES (NUMERAL 7, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

- 6.1. El señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, nació el 01/08/1964, según consta en su documento de identificación.
- 6.2. El demandante cotizo para su pensión a través de diferentes empresas privadas desde el 01/07/1991 hasta la fecha acreditante más de 1.533 semanas.
- 6.4. En el año 1995, el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO se afilió a la COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. a efectos de vincularse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
- 6.5. Para la fecha del traslado de régimen el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO había cotizado **178 semanas**.
- 6.6. El demandante se traslada para el fondo privado LA A.F.P. PORVENIR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS. en el año 1995.
- 6.7. El demandante se traslada para el fondo privado LA A.F.P. COLFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS. en el año 2000.
- 6.8. El demandante se traslada para el fondo privado LA A.F.P. PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS. en el año 2015.
- 6.9. Las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS no informaron a el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO al momento de la afiliación, las implicaciones de trasladarse de régimen pensional.

- 6.10. Las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS no informaron a el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO previo a la afiliación a dicho fondo, la naturaleza propia de este régimen de capitalización.
- 6.11. Las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS no brindaron al demandante al momento de la afiliación, la información sobre las desventajas de afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
- 6.12. Las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS no ilustraron a el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO al momento de la afiliación sobre los distintos escenarios comparativos de pensión en uno u otro régimen pensional.
- 6.13. Las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS no conocían el número de semanas cotizadas por el demandante previo a la suscripción de la afiliación a dicha administradora.
- 6.14. Las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS no conocían el promedio salarial sobre el cual cotizaba el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO previo a la suscripción de la afiliación a dicha administradora.
- 6.15. Para la fecha de afiliación a la A.F.P. PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. El demandante tenía como salario la suma de \$ 1.060.016.
- 6.16. Las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS no le sugirieron al demandante que debía quedarse en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
- 6.17. Las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS no le informaron a el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO sobre las ventajas de permanecer en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
- 6.18. Durante la permanencia en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el demandante nunca recibió asesoría profesional completa y comprensible sobre las diferentes alternativas para la elección de su régimen pensional.
- 6.19. El demandante decide contratar por su propia cuenta una asesoría particular y se da cuenta que había sido engañada por Las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P

PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS para afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y que había generado un conocimiento falso de la realidad.

6.20. En razón de lo anterior el día 05/12/2022 el demandante solicito ante la A.F.P. COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. :

- Remitirme copia de la información suministrada y los demás documentos obrantes en el expediente del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO a la fecha de la afiliación al RAIS y los demás realizados desde dicha fecha.
- Declarar nula la afiliación efectuada al RAIS, realizada y promovida por **COLFONDOS AFP** a nombre del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO por no haber brindado la asesoría e información suficiente al momento de la afiliación, lo que generó un vicio en el consentimiento y por lo mismo dicha afiliación debe tenerse como NULA, y así debe registrar en el sistema de afiliación de los fondos privados SIAFP.
- Como consecuencia de lo anterior, solicito se informe a ASOFONDOS y a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, para que se registre la correspondiente novedad en el sistema de información de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
- Se traslade a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, los aportes en pensión que haya efectuado mi representada, junto con los respectivos rendimientos a que haya lugar.
- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la afiliación al RAIS, establecer que la Sra. señora LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO nunca dejó de pertenecer al régimen de prima media con prestación definida y en consecuencia se encuentra válidamente afiliado al RPM administrado por COLPENSIONES.

6.21. En razón de lo anterior el día 05/12/2022 el demandante solicito ante la A.F.P. PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. :

- Remitirme copia de la información suministrada y los demás documentos obrantes en el expediente del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO a la fecha de la afiliación al RAIS y los demás realizados desde dicha fecha.
- Declarar nula la afiliación efectuada al RAIS, realizada y promovida por **PORVENIR AFP** a nombre del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO por no haber brindado la asesoría e información suficiente al momento de la afiliación, lo que generó un vicio en el consentimiento y por lo mismo dicha afiliación debe tenerse como NULA, y así debe registrar en el sistema de afiliación de los fondos privados SIAFP.
- Como consecuencia de lo anterior, solicito se informe a ASOFONDOS y a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, para que se registre la correspondiente novedad en el sistema de información de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

- Se traslade a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, los aportes en pensión que haya efectuado mi representada, junto con los respectivos rendimientos a que haya lugar.
- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la afiliación al RAIS, establecer que la Sra. señora LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO nunca dejó de pertenecer al régimen de prima media con prestación definida y en consecuencia se encuentra válidamente afiliado al RPM administrado por COLPENSIONES.

6.22. En razón de lo anterior el día 05/12/2022 el demandante solicito ante la A.F.P. LA A.F.P. PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS. :

- Remitirme copia de la información suministrada y los demás documentos obrantes en el expediente del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO a la fecha de la afiliación al RAIS y los demás realizados desde dicha fecha.
- Declarar nula la afiliación efectuada al RAIS, realizada y promovida por **PROTECCION AFP** a nombre del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO por no haber brindado la asesoría e información suficiente al momento de la afiliación, lo que generó un vicio en el consentimiento y por lo mismo dicha afiliación debe tenerse como NULA, y así debe registrar en el sistema de afiliación de los fondos privados SIAFP.
- Como consecuencia de lo anterior, solicito se informe a ASOFONDOS y a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, para que se registre la correspondiente novedad en el sistema de información de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
- Se traslade a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, los aportes en pensión que haya efectuado mi representada, junto con los respectivos rendimientos a que haya lugar.
- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la afiliación al RAIS, establecer que la Sra. señora LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO nunca dejó de pertenecer al régimen de prima media con prestación definida y en consecuencia se encuentra válidamente afiliado al RPM administrado por COLPENSIONES.

6.23. El 05/12/2022 el demandante radicó ante COLPENSIONES la solicitud de activación de la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, manifestando que había existido vicio en su consentimiento al momento de afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad además se solicitó:

- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la afiliación al RAIS, establecer que el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO nunca dejó de pertenecer al régimen de prima media con prestación definida y en consecuencia se encuentra válidamente afiliado al RPM administrado por COLPENSIONES.
- Declarar nula la afiliación efectuada al RAIS, realizada y promovida por **COLFONDOS AFP** a nombre del señor **LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO**.

- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la afiliación al RAIS, establecer que el señor, LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO nunca dejó de pertenecer al régimen de prima media con prestación definida y en consecuencia se encuentra válidamente afiliado al RPM administrado por COLPENSIONES.
- Solicitar a PROTECCION AFP a efectuar la devolución de los aportes efectuados por mi mandante en el RAIS al RPM administrado por COLPENSIONES.
- ACTIVAR la afiliación del señor **LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO** en esta entidad.
- Convalidar en la historia laboral de esta entidad los aportes devueltos por el RAIS.

6.24. La COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. NO dio contestación a la solicitud del demandante.

6.25. La PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. NO dio contestación a la solicitud del demandante.

6.26. La SKANDIA S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. NO dio contestación a la solicitud del demandante.

6.27. La A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS. No dio contestación a la solicitud del demandante negando lo solicitado.

6.28. COLPENSIONES contesto negando lo solicitado.

7. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO (NUMERAL 8, ARTÍCULO 25 DEL C.P.T. Y S.S.):

Art. 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política; Art. 13, 33 y 288 de la Ley 100 sancionada en 1993. Decreto 656 de 1994. Decreto 692 de 1994.

Constitución Política

- Colombia es un Estado organizado e institucionalizado en forma de República Unitaria y descentralizada con autonomía, con gobierno participativo y pluralista, fundamentalmente vigilando, la igualdad humana y el trabajo de los Nacionales, donde el Estado sirve de garante, en calidad de inspector y vigilante, para impedir que sean violados los derechos adquiridos por los trabajadores, mediante actos administrativos arbitrarios y contrarios a derecho como ocurre en el caso que nos ocupa.
- La Constitución Política, en su **artículo 2** consagra como fines fundamentales del Estado, el garantizar a sus asociados, la efectividad de los principios, deberes y derechos, consagrados en la Constitución y como se observa a mi mandante se le desconocieron los derechos a la información, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y a la libre elección de régimen pensional.

- El trabajo goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado, siendo todo trabajador merecedor de condiciones justas y equitativas.
- Toda persona humana y con el solo hecho de ser Colombiano tiene derecho a solicitar a la autoridad competente se le reconozca sus justos derechos.
- El gobierno garantiza los derechos mínimos de los trabajadores, de acuerdo a la Ley sustantiva.

· **Artículo 13** de la Constitución Política, establece que todas las personas son iguales ante la Ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación.

- El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan, sobre todo si se trata de personas de la tercera edad.

· **Artículo 48** de la Constitución Política, consagra que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

- Igualmente, garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

· **Artículo 53** de la Constitución Política, prescribe que el Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La Ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las normas formales de derecho.

- **Artículo 58** de la Constitución Política, garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las normas civiles las cuales no pueden ser desconocidas ni vulneradas por leyes posteriores.

La Ley 141 de 1961 adopto como legislación permanente los decretos 2663 del 15 de agosto de 1950 sobre Código Sustantivo del Trabajo y 3743 del 20 de diciembre del mismo año, modificadorio del Decreto 2663.

Artículo 21 del C.S.T. Normas más favorables.- En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adapte debe aplicarse en su totalidad.

Por su parte en el ordenamiento legal se tiene:

La Ley 100 sancionada en 1993 (23 de diciembre, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones).

Artículo 11.- Campo de aplicación.- El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el art. 279 de la presente Ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio Nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme las disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplidos los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez y sustitución o sobrevivientes de los sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de los Seguros Sociales y del sector privado en general.

Para efectos de este artículo se respetaran y por lo tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo.

Artículo 288.- Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

CODIGO CIVIL COLOMBIANO

ARTICULO 1502. REQUISITOS PARA OBLIGARSE. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

1o.) que sea legalmente capaz.

2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.

3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.

4o.) que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra.

ARTICULO 1508. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo.

ARTICULO 1510. ERROR DE HECHO SOBRE LA ESPECIE DEL ACTO O EL OBJETO.

El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra.

ARTICULO 1511. ERROR DE HECHO SOBRE LA CALIDAD DEL OBJETO. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante.

El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte.

ARTICULO 1740. CONCEPTO Y CLASES DE NULIDAD. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa.

ARTICULO 1741. NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.

ARTICULO 1742. OBLIGACIÓN DE DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA. <Artículo subrogado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1936. El nuevo texto es el siguiente:> La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria.

ARTICULO 1746. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-993/06. Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA

“En esta forma, el ordenamiento jurídico, en forma general, otorga validez a los actos de las autoridades o de los particulares que se ciñen en su formación a las disposiciones del mismo, o sea, otorga validez a los actos lícitos, y la niega a los que se apartan de ellas, es decir, a los actos ilícitos. (...)

Una manifestación de dicha reacción del ordenamiento jurídico frente a los actos contrarios al mismo son las nulidades en el campo del Derecho Privado, las cuales, conforme al criterio predominante en los ordenamientos estatales deben ser declaradas por la jurisdicción y producen efectos retroactivos, es decir, restablecen la situación anterior al acto invalidado, como si éste no hubiera existido. Dicha contrariedad proviene de la infracción por los particulares, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada: i) de normas de carácter imperativo, que tienen interés general, o ii) del orden público, que conforme a la doctrina actual tiene un componente tradicional de carácter político y moral, que busca

hacer respetar la organización del Estado, la familia y la moralidad pública, y un componente moderno o reciente de carácter económico y social.

Sobre este tipo de reacción el Código Civil colombiano (Art. 6º) prevé lo siguiente:

“La sanción legal no es sólo la pena sino también la recompensa: es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones.

“En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas, aparte de las que se estipulan en los contratos”.

6. *En virtud de la garantía de la autonomía de la voluntad privada y, también, de la garantía de la justicia en ese amplio campo de la actividad de las personas, el ordenamiento positivo exige que la manifestación de voluntad sea consciente y libre, esto es, que no esté afectada por irregularidades que genéricamente son denominadas en la ley y en la doctrina vicios del consentimiento, los cuales son error, fuerza y dolo (Art. 1508 del Código Civil).*

(...)

El error, por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre la representación mental del sujeto y la realidad, es decir, en el conocimiento no verdadero o falso de la realidad. Se distingue de la ignorancia, en cuanto ésta consiste en la ausencia de conocimiento.

Estos vicios de la voluntad están sancionados en el ordenamiento civil colombiano con la nulidad relativa, que sólo puede ser declarada por el juez a pedimento de la parte en cuyo beneficio ha sido establecida (Arts. 1741 y 1743 Código Civil).

7. *Para los efectos de este examen interesa en particular la distinción entre el error de derecho, que se refiere a la existencia, naturaleza o extensión de los derechos que son objeto del negocio jurídico[7], y el error de hecho, que concierne a modificaciones del mundo exterior.*

Desde el punto de vista psicológico, ambos tipos de error configuran un vicio de la voluntad. No obstante, en el campo jurídico su regulación no es uniforme, en cuanto en los ordenamientos de algunos Estados se les concede por igual el carácter de vicios del consentimiento y, en cambio, en los ordenamientos de otros Estados, como es el caso del colombiano, sólo se otorga dicho carácter al error de hecho, con exclusión del error de derecho. Esta distinción es la que motiva precisamente la demanda que se analiza, en cuanto el actor considera que con ella se vulneran los principios de autonomía de la voluntad privada y de igualdad.”

CASO CONCRETO

Las administradoras del régimen de ahorro individual –RAIS, AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS, A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P. PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS omitieron brindar información a el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, sobre hechos relevantes a su situación pensional, que le hubiesen impedido suscribir la afiliación al RAIS.

Como consecuencia de esa falta de información oportuna, cierta, veraz, especial, profesional, que debe trascender al simple deber de información, El demandante nunca tuvo la oportunidad de escoger libremente el régimen pensional que le era más favorable y por consiguiente la afiliación efectuada al RAIS es nula o ineficaz, en los términos de la

jurisprudencia emitida por la H. Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y los Tribunales Superiores en su especialidad Laboral.

Es procedente la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación suscrita por el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO al Régimen de ahorro individual con solidaridad en razón a la falta de asesoría por parte de las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS con ocasión de las consecuencias que implicaba la afiliación, **incluyendo la Disminución de su mesada pensional en más del 69%.**

Sobre el deber de información contenido con el artículo 10° del decreto 720 de 1994, es necesario resaltar que *“cualquier infracción error u omisión, en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses del afiliado, en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del Sistema General de Pensiones en desarrollo de su gestión, compromete la responsabilidad de la entidad administradora respecto de la cual se adelante tal labor...”*.

OBLIGACIONES INCUMPLIDAS POR PARTE DE LAS ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD

DECRETO 656 DE 1994

Por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones

Artículo 4°.- En su calidad de administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter previsional y, como tales, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados.

CAPITULO VI

OBLIGACIONES ESPECIALES

Artículo 15°.- “Todo fondo de pensiones deberá tener un plan de pensiones y un reglamento de funcionamiento aprobados de manera previa e individual por la Superintendencia Bancaria. El reglamento debe contener, a lo menos, las siguientes previsiones:

- a) Los derechos y deberes de los afiliados y de la administradora;
- b) El régimen de gastos conforme a las disposiciones que establezca la Superintendencia Bancaria, y
- c) Las causales de disolución del fondo.

El texto del reglamento, **así como del respectivo plan, deberá ser entregado a cada afiliado a más tardar al momento de su vinculación.**

Los reglamentos deberán ser redactados de forma tal que sean de fácil comprensión para los afiliados y la copia que de los mismos se entregue a éstos deberá emplear caracteres tipográficos fácilmente legibles.”

Artículo 18°.- Las administradoras deberán avisar a sus afiliados, con una antelación no inferior a tres (3) meses, el momento en el cual se cumplirán los requisitos para acceder a la garantía estatal de pensión mínima, mencionando las modalidades de pensión establecidas por la ley, junto con una descripción suficiente de cada una de ellas.

Parágrafo.- Los informes sobre modalidades de pensión que suministren las administradoras a los afiliados deberán contener los datos necesarios y suficientes sobre las alternativas existentes, de tal forma que permitan a los afiliados tomar decisiones que consulten sus mejores intereses.

Artículo 35°.- Las sociedades administradoras de fondos de pensiones se regirán por las disposiciones especiales de la Ley 100 de 1993 y el presente Decreto y, en lo no previsto en ellos y en su orden, por las normas aplicables a las sociedades de servicios financieros y a las instituciones financieras.

En lo no regulado por estas normas serán aplicables las disposiciones del Código de Comercio o la legislación cooperativa según corresponda.

Artículo 36°.- Continuarán vigentes las disposiciones que regulan la actividad de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía en todo lo que no pugne con el presente Decreto.

ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

“LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES TIENEN EL DEBER DE INFORMAR A SUS AFILIADOS SOBRE SU SITUACIÓN PENSIONAL” SI NO LO HACEN LA AFILIACION AL R.A.I.S. ES NULA

La línea jurisprudencial de la **Corte Suprema de Justicia** frente al deber legal de las A.F.P. en este sentido ha concluido que: existe una obligación de los fondos de pensiones al momento de la afiliación consistente en el deber de proporcionar información completa, adecuada, suficiente, cierta y comprensible al ciudadano dentro de todas las etapas de dicho proceso, es decir, desde la afiliación hasta el disfrute de la pensión e inclusive las derivadas después de la pensión como es el caso eventual del fallecimiento, a aquellos beneficiarios. (**Sentencias Radicado No. 31314 del 2008, Radicado No. 31989 del 2008, y Radicado No. 33083 de noviembre de 2011**)

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN LABORAL. MAGISTRADO PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS. Referencia: Expediente No. 31989. Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil ocho (2008). En la cual Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial de JUAN RAFAEL VARGAS JARAMILLO contra la sentencia de 12 de febrero de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra la— COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

“Las administradoras de pensiones hacen parte, como elemento estructural, del sistema; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones; tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, que autoriza su existencia, -desarrollado por los artículos 90 y s.s. de la Ley 100 de 1993 - cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público, “la dirección, coordinación y control” de la Seguridad Social, y autoriza su prestación a través de particulares.

Las administradoras de pensiones han de estar autorizadas para fungir como tales si cumplen una serie de requisitos que las cualifican, hacen parte del elenco de las entidades financieras, cumplen una actividad que en esencia es fiduciaria y han de ajustar su funcionamiento a los requerimientos técnicos propios para esta clase de establecimientos, pero bajo el entendido de que todos ellos han de estar ordenados a cumplir con la finalidad de prestar un servicio público de la seguridad social.

La doble condición de las administradoras de pensiones, de sociedades que prestan servicios financieros y de entidades del servicio público de seguridad social, es compendiada en la calificación de instituciones de carácter previsional, que les atribuye el artículo 4° del Decreto 656 de 1994, y que se ha de traducir en una entidad con solvencia en el manejo financiero, formada en la ética del servicio público.

Ciertamente las administradoras de pensiones son en esencia fiduciarias del servicio público de pensiones, razón por la cual su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora.

Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en caso de muerte prematura.

Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información.

La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.

Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.

Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención.

*En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera **la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.***

No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que “se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones”, pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña.

Se ha de señalar que la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales.

Por las razones anteriores el cargo es próspero y el fallo del Tribunal será casado en su integridad.”

Es así como de la afiliación a las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS, y de las demás administradoras involucradas, nace la adquisición de unos derechos, pero también es el nacimiento de obligaciones en el marco de la Seguridad Social que lo comprenden los derechos del afiliado a ser informado y el deber de la administradora de brindar un

estudio integral dando a conocer las diferentes alternativas con sus ventajas y desventajas, beneficios e inconvenientes de la selección de dicho régimen, pero en especial teniendo en cuenta que en aplicación del derecho constitucional de la seguridad social en materia pensional **la afiliación no puede implicar la pérdida de condiciones más favorables en el disfrute o en el propio acceso a la pensión como puede verse reflejadas en la disminución del monto de la mesada pensional (como se colige del estudio actuarial aportado al proceso), o **inclusive que implique acceder a la pensión en un tiempo posterior**, de lo que puede concluirse que al dar aplicación a la línea jurisprudencial que se ha planteado, debe verificarse dentro de la actuación procesal cual fue la asesoría que tuvo o que fue suministrada a el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO en cuanto a esos elementos de juicio, y si realmente le fueron ofrecidos por la demandada, para el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad.**

Las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LAA.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS, pasaron por alto el deber legal de advertir al afiliado que dicho régimen no le convenía, porque en el régimen de ahorro individual mi poderdante no iba a alcanzar una mesada siquiera similar a la que obtendría en el Instituto de Seguros Sociales, situaciones que vician de nulidad el traslado, téngase en cuenta que el bono pensional de mi representado no era lo suficientemente significativo y su pensión dependería en gran medida de los aportes considerables que efectuara en adelante, en tal medida y con las mismas condiciones no podrían ofrecer un escenario mejor al que estaba construyendo en el Seguro Social, hoy en día Colpensiones.

Las Administradoras del régimen de ahorro individual, omitieron prestar la debida asesoría para el momento del traslado, situación que no es admisible ya que por su calidad de administradoras tienen el *“deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora”* (Rad. 31989 del 09/09/2008 M.P. Eduardo López Villegas), motivo por el que deben **anteponer su beneficio ante cualquier perjuicio grave que le pueda causar a sus afiliados.**

En cuanto a la **CARGA DE LA PRUEBA**, como se indicó anterior mediante Sentencia Radicado No. 33083 de noviembre de 2011 la Corte Suprema de Justicia señaló que ***“En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.”***

Criterio al que debe sumarse el principio de la carga dinámica de la prueba, pues se encuentra concretamente la A.F.P. COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. y de las demás administradoras involucradas en mejor posibilidad o posición de probar los hechos que se han puesto a consideración del Despacho, pues evidentemente cuentan con las bases de datos, con la tecnología de punta suficiente, para no solo archivar documentos de acuerdo a las disposiciones legales que sobre la materia existen (para acreditar los posibles planes o proyecciones ofrecidas a el demandante previo a la afiliación), sino también podían documentar las actuaciones o situaciones que se presentaron al momento de la afiliación.

En este orden recae en la AFP COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. y en las demás administradoras involucradas la carga de demostrar que cumplieron con su deber de ofrecer a su afiliado una información veraz y suficiente cuando definía su situación de permanencia o cambio de régimen pensional, circunstancia que no alcanza a materializarse en el *examine* con la simple afirmación de haber cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 **pues le incumbía acreditar que le explicó en detalle las consecuencias de la vinculación a su administradora.**

Las administradoras incurrieron en una omisión de su deber de información con perjuicio de las expectativas legítimas y condiciones pensionales del demandante, obligación que con arreglo a la ley y al desarrollo jurisprudencial le correspondía e imponía la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad pretendida ante la falta de diligencia e información respecto de la accionante”

Es oportuno igualmente traer a colación sentencia del 9 de septiembre de 2008 **Referencia: Expediente No. 31989, Corte Suprema de Justicia** dentro del proceso instaurado por JUAN RAFAEL VARGAS JARAMILLO contra COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A., con ponencia del Dr. EDUARDO LOPEZ VILLEGAS, que señaló:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto un afiliado lego, en materias de alta complejidad.

“...la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente lo perjudica. Negrilla fuera de texto.

(...)

Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención.

(...)

En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.” Negrilla fuera de texto

No hubo por parte de COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. y de las demás administradoras involucradas un análisis especialísimo del caso en particular, ni proyecciones actuariales de un grupo liquidador especializado a fin de establecer y asesorar el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, sobre las consecuencias que conllevaría trasladarse del régimen de prima media al de ahorro individual.

Como lo ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia, la afiliación conlleva una serie de derechos y obligaciones de los fondos, entre las obligaciones se encuentra la de brindar un estudio integral, que muestre las ventajas, desventajas, beneficios e inconvenientes a futuro del afiliado, ello porque conforme el derecho constitucional a la seguridad social en materia pensional, **la afiliación no puede implicar la pérdida de condiciones más favorables en el disfrute o en el propio acceso a la pensión, como la disminución del monto o acceder a la pensión en tiempo posterior.**

Más recientemente y siguiendo la línea en el deber de asesoría que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones con los afiliados la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 3 de septiembre de 2014, radicación RAD 12136 - 46292 M.P. ELSY DEL PILAR CUELLAR, señaló:

En efecto, es el propio Estatuto de la Seguridad Social el que conceptúa que el régimen de ahorro individual con solidaridad, si bien propende por «la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector público y sector social solidario», se rige bajo el respeto del «que libremente escojan los afiliados», lo que exhibe que el legislador, si bien permitió que nuevos actores económicos incursionaran en la administración del Sistema Pensional, no descuidó que se honraran las prerrogativas de los afiliados, menos si se tiene en cuenta, se insiste, que regularía derechos constitucionalmente protegidos como la pensión.

(...) el afiliado debe conocer los riesgos del traslado, pero a su vez los beneficios que aquel le reportaría, de otro modo no puede explicarse el cambio de un régimen al otro.

*A juicio de esta Sala **no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales**, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.*

Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de determinar si hubo eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición normativa.

Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, advertir que la misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido que el régimen de transición no es una mera expectativa.

De lo anteriormente expuesto es posible concluir que el solo formulario de afiliación no es prueba de que la selección de dicho régimen se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, pues es obligación de los fondos al momento de efectuar la afiliación brindar la información completa, adecuada, suficiente, cierta y comprensible, *“la elección del régimen pensional trasciende al simple deber de información y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social la administradora tiene el deber del buen consejo que le compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas con sus beneficios e inconvenientes*

y aun a llegar si este fuera el caso a desanimar al interesado de tomar una decisión que claramente le perjudica si ese fuera el caso”.

Las demandadas, AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS, omitieron suministrar información relevante al asegurado que le hubiese permitido escoger libre y voluntariamente el régimen pensional más favorable a sus intereses, Vale la pena reiterar que mi representado nunca alcanzaría una pensión siquiera similar a la que obtendría en el régimen de prima media.

Valga la pena señalar que estos asuntos ya han sido debatidos en distintas instancias judiciales, y en los cuales siguiendo el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia se ha concluido que en casos como en el del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, claramente existió un incumplimiento por parte de las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS de sus deberes legales de información y de buen consejo, y que por consiguiente sus pretensiones deben prosperar.

LA SALA LABORAL DE DESCONGESTIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, EN SENTENCIA CALEDADA EN SEPTIEMBRE 9 DE 2009, CON PONENCIA DE LA DOCTORA MARTHA AVILA TRIANA SEÑALÓ:

“Como primera medida podemos apreciar que no existe ningún elemento de prueba en el sumario, de acuerdo con el cual esta Colegiatura pueda vislumbrar con claridad que la supuesta manifestación de voluntad del actor plasmada en el formulario de afiliación arriba transcrito se hubiera dado en realidad.

La expresión libre de un acto voluntario no puede entenderse necesariamente porque el actor hubiera plasmado su firma en el formulario de afiliación, máxime cuando se observa que dicho formulario es usado de manera indistinta para efecto de afiliación al régimen de cesantías. Esto sería darle una validez simplemente a las formas, pasando de manera plana y simple por abultadas circunstancias que difieren de lo real.

No considera la Sala que en el caso del actor, la sola firma sea expresión de una conducta tendiente a la aceptación de determinadas condiciones establecidas en el formulario de afiliación para trasladarse a un régimen de pensiones diferente, porque para que esto ocurriera, era menester establecer que el afiliado efectivamente recibió una asesoría clara e ilustración suficiente acerca de las ventajas y desventajas que representaba para él, el cambio de R.P.M. a R.A.I.S., la manera en que se pensionaría en el R.P.M. y en qué posible cuantía, el capital necesario que se requeriría en el R.A.I.S. para obtener al menos una pensión del 110% del salario mínimo, datos que eran posibles de mostrarle al futuro pensionado, así fuera aproximativamente, toda vez que si no se hubiera trasladado al FONDO BBVA HORIZONTE, con seguridad, en el I.S.S., hubiera logrado una prestación definida a la vuelta de tan sólo cuatro años, y beneficiado de todas las prerrogativas y requisitos del régimen de transición.

No se encuentran pruebas en el expediente con base en las cuales podamos entender plausiblemente que el vinculado al nuevo régimen de pensiones, asumió esta decisión con

un horizonte fidedigno y con toda la responsabilidad, las consecuencias que su actuar conllevaba.

La AFP COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. debió probar en este plenario, el suministro de toda una gama de información al afiliado para que se pudiera inferir con toda precisión que éste tomó una decisión libre y ausente de toda duda, tendiente a obtener del Sistema de Pensiones, las mejores oportunidades para asegurar su pensión mensual vitalicia de vejez, que como vemos en este caso, se vio frustrada por una mala decisión, asunto que no se podrá convalidar en esta instancia, pues es imposible desconocer que el señor JOSE ORTEGA recorrió un largo trasegar de vida pensional construido con sus aportes realizados al Instituto de Seguros Sociales, desde 1971 hasta el año 2004, realidad que se impone con todo su peso, y fluye con mayor vigor respecto de las formalidades que hizo valer el a quo en su decisión.

Resulta inadmisibile y reprochable la conducta de este Fondo Privado, el hecho de haber desconocido la realidad pensional del actor. Sin ningún tipo de responsabilidad social en un tema tan delicado y del mayor impacto para la sociedad como es el de Seguridad Social, al proceder a realizar una afiliación al demandante, a un régimen de pensiones que no representaba para él ninguna oportunidad, ventaja o plus, respecto de la construcción de una sólida prestación que se configuraría en el R.P.M. con prestación definida, en la que era por lo menos estimable la edad con la que se pensionaría, el monto, y cuantía pensional si continuaba a un cierto ritmo de cotizaciones, teniendo en cuenta además una determinada densidad de semanas que tenían ya, una cierta regularidad de acumulación. COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. no obró con lealtad, ni prueba su buena fe, asunto que no se está presumiendo en el sub lite sino que aflora de los elementos de prueba...” (Subrayado fuera de texto)

SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,
Proceso No. 11001310501520120030802, DEMANDANTE: Luis Alberto Ángel Arango.
DEMANDADO: A.F.P. PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS. **MAGISTRADO**
PONENTE: LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL. Diecisiete (17) DE MARZO DE 2015, para un caso similar al del demandante señalo:

“La parte demandada a quien correspondía la carga de la prueba, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 177 del C.P.C. no acreditó fehacientemente el cumplimiento de la obligación legal que le asistía de informar al actor de forma clara y precisa de las consecuencias que le acarrearía su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ya que no obra dentro del plenario prueba alguna que así lo acredite, como que del hecho de trasladarse implicaba la renuncia del régimen de transición del cual era beneficiario el actor en el Régimen de prima Media (...)

(...) configurándose la existencia del error como vicio que invalida el consentimiento del actor al momento de decidir su vinculación al RAIS efectuado el 30 de septiembre de 1999 a las luces de lo establecido en el artículo 1502 del C.C. ya que dicho consentimiento fue motivado única y exclusivamente por la información que suministrara en su momento la entidad accionada respecto de los beneficios que ofrecía de manera pura y llana el RAIS en relación con el monto de la mesada pensional y la edad para pensionarse, pero sin manifestarle la pérdida de los beneficios con los cuales se encontraba amparado en el régimen de prima media, información que callo u oculto de forma deliberada la administradora siendo su único objetivo el de generar un nuevo afiliado”

SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,
Proceso No. 11001310501720130016001, DEMANDANTE: Luisa Josefina Nieto.
DEMANDADO: CITICOLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS. **MAGISTRADA**
PONENTE: LILLY YOLANDA VEGA BLANCO. Diecisiete (17) DE FEBRERO DE 2015,
para un caso similar al del demandante señalo:

"(...) En estas condiciones al momento de trasladarse a la AFP el señor Nieto Torres contaba con 42 años y 544.28 semanas de cotizaciones, aun cuando le faltaban 16 años para cumplir la edad mínima y menos de la mitad, tenía una expectativa legítima al favorecerse de los beneficios transicionales"

"La AFP no acredita haber suministrado información clara, precisa y detallada a la accionante sobre las consecuencias de su traslado a un fondo privado como beneficiaria del régimen de transición, situación que constituye omisión de su deber de información, y es que la doctrina ha advertido de las obligaciones especiales que corresponden a las entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria como las Administradoras de Pensiones, entre las cuales se destacan la buena fe, transparencia, vigilancia así como el deber de información, en el punto al tema del deber de información la Sala de Casación Laboral de la Corporación de cierre de la Jurisdicción Ordinaria ha indicado que:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionarle a sus interesados una información completa y comprensible a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego en materias de alta complejidad, siendo una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se tratan de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, la elección del régimen pensional trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de seguridad social la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información e ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas con sus beneficios e inconvenientes y aun a llegar si fuere el caso a desanimar al interesado de tomar una decisión que claramente le perjudica (...)."

*En este orden recaía en COLFONDOS la carga de demostrar que cumplió con su deber de ofrecer a su afiliado una información veraz y suficiente cuando definía su situación de permanencia o cambio de régimen pensional, circunstancia que no alcanza a materializarse en el examine con la simple afirmación de haber cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 **pues le incumbía acreditar que le explico en detalle las consecuencias de la vinculación a su administradora,** especificando que la decisión del traslado le imponía la pérdida de los beneficios transicionales como era la posibilidad de acceder a la prestación jubilatoria a menos edad, con menor densidad de cotizaciones y en monto superior, y que sin embargo con pleno conocimiento de lo anterior ella opto por el cambio de régimen, entonces surge evidente que **la administradora incurrió en una omisión de su deber de información con perjuicio de las expectativas legítimas y condiciones pensionales del demandante, obligación que con arreglo a la ley y al desarrollo jurisprudencial le correspondía e imponía la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad pretendida ante la falta de diligencia e información respecto de la accionante**"*

Sala Laboral del TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, en el proceso RAD: 8731- 2007-0355-02, **DEMANDANTE:** JULIA EDITH PÉREZ RINCÓN. **DEMANDADO:** BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS (SENTENCIA) 1°. **MAGISTRADO PONENTE: DOCTOR CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO. VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE (2009),** para un caso similar al del demandante señalo:

“el fondo de pensiones demandado, en el caso de la reclamante ni siquiera se ocupó de brindarle asesoría e información directa a través de un representante suyo, atinente a lo que para ella traería como consecuencia el traslado del régimen solidario de prima media con prestación definida, al de ahorro individual con solidaridad, cuando ha debido hacerlo, empleando para ello los recursos técnicos y administrativos de que dispone, con el objeto de que ella pudiera disfrutar de los beneficios a que da derecho la seguridad social de manera “...adecuada, oportuna y suficiente...” , como lo ordena la última norma sustantiva citada.”

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACION LABORAL. M.P. ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN. Radicación n°46292. Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014)

“En efecto, es el propio Estatuto de la Seguridad Social el que conceptúa que el régimen de ahorro individual con solidaridad, si bien propende por «la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector público y sector social solidario», se rige bajo el respeto del «que libremente escojan los afiliados», lo que exhibe que el legislador, si bien permitió que nuevos actores económicos incursionaran en la administración del Sistema Pensional, no descuidó que se honraran las prerrogativas de los afiliados, menos si se tiene en cuenta, se insiste, que regularía derechos constitucionalmente protegidos como la pensión.

*Bajo el entendido de que «el sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan» (artículo 1°, Ley 100 de 1993) y que la elección tanto del modelo de prima media con prestación definida, como el de ahorro individual con solidaridad, es determinante para predicar la aplicación o no del régimen de transición, es necesario entender, **que las entidades encargadas de su dirección y funcionamiento, garanticen que existió una decisión informada, y que esta fue verdaderamente autónoma y consciente; ello es objetivamente verificable, en el entendido de que el afiliado debe conocer los riesgos del traslado, pero a su vez los beneficios que aquel le reportaría, de otro modo no puede explicarse el cambio de un régimen al otro.***

*A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; **de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.***

Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de determinar si hubo

eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición normativa. Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, advertir que la misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido que el régimen de transición no es una mera expectativa.

En perspectiva del literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, es imperativo para el Juez que deba resolver sobre la viabilidad o no de la aplicación del régimen de transición, ante la existencia del traslado, no simplemente verificar los requisitos atrás descritos, sino, además dar cuenta sobre si el mismo se realizó bajo los parámetros de libertad informada.

Surge obvio que el alcance del tránsito del régimen de prima media al de ahorro individual con solidaridad, pudo traer para un contingente de personas la pérdida de la transición; por las características que el mismo supone, es necesario determinar si también en esos eventos puede predicarse simple y llanamente que existió libertad y voluntariedad para que el mismo se efectuara.

Realizar dicha tarea debe partir de elementos objetivos, esto es que la libertad en la toma de una decisión de esa índole, solo puede justificarse cuando está acompañada de la información precisa, en la que se delimiten los alcances positivos y negativos en su adopción.

Una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos del tránsito de régimen son indicativos de que la decisión no estuvo precedida de la comprensión suficiente, y menos del real consentimiento para adoptarla.

Es evidente que cualquier determinación personal de la índole que aquí se discute, es eficaz, cuando existe un consentimiento informado; en materia de seguridad social, el juez no puede ignorar que por la trascendencia de los derechos pensionales, la información, en este caso, del traslado de régimen, debe ser de transparencia máxima.

Para este tipo de asuntos, se repite, tales asertos no comprenden solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que puede ser cualquiera de los dos (prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad), sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Esas reglas básicas, permiten en caso de controversia estimar si el traslado cumplió los mínimos de transparencia, y de contera, sirven de soporte para considerar si el régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable."

TRASLADOS ENTRE ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD NO CONVALIDA LA AFILIACION VICIADA

Aunque en el caso puesto a su consideración el demandante presento diferentes traslados entre Administradoras de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ciertamente se puede inferir que el conocimiento errado de la realidad generado por la primera administradora, A.F.P. COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. se mantuvo en el tiempo ya que de las Sociedades Administradoras a las cuales efectuó aportes el demandante con posterioridad a su afiliación, NINGUNA le brindo la asesoría e información correspondiente al demandante, y por tanto como ha sido analizado en casos

análogos y similares al que nos ocupa, dichos traslados NO CONVALIDAN LA AFILIACION VICIADA AL REGIMEN, así lo analizó la **Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Laboral y de la Seguridad social, con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, en la sentencia Radicado No. 31314 , calendada el nueve (09) de septiembre de dos mil ocho (2008):**

“... Se ha de señalar que la actuación viciada de traslado de régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales”

EXPECTATIVA DE EL DEMANDANTE AL MOMENTO DE LA AFILIACION AL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD

Si bien es cierto el demandante nunca cumplió con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria del régimen de transición, también es cierto que para la fecha del traslado de régimen al pertenecer al Régimen de Prima Media con Prestación Definida en ese momento administrado por el Instituto de Seguros Sociales, le daba el derecho a pensionarse bajo los parámetros del Sistema General de Pensiones, esto es conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la citada norma, que para la época de la afiliación al fondo, **en Febrero de 1995** (aún no habían modificaciones a la Ley 100 de 1993) señalaba:

ARTICULO. 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo.

De lo anterior se puede concluir, que el Asesor que representaba a la A.F.P. **COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A.** tenía el deber legal de analizar las implicaciones positivas y negativas que tenían para mi representado el hecho de que decidiera trasladarse de régimen, ya que si El demandante se trasladaba al fondo privado, aun cotizando continuamente sobre el mismo promedio salarial que reportaba, no iba a alcanzar siquiera una pensión similar ni superior a la que estaba construyendo en el R.P.M.P.D.

Aún más, con el solo hecho de valorar y calcular el bono pensional del señor **LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO**, a la fecha del traslado, **COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A.** se podía dar cuenta que la mayor parte de su pensión dependería de los aportes futuros que pudiera hacer el demandante al sistema de pensiones, ya que su bono pensional no era lo suficientemente significativo en relación con el promedio salarial que venía manteniendo mi representado para la fecha en que se trasladó de régimen pensional.

Ese tipo de análisis era el que realmente el asesor de la **COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A.** debía haber realizado previo a animar o alentar a el demandante para

que se afiliara a su administradora, y será el que dentro del presente proceso debe probar la demandada para colegir que el consentimiento del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO no estuvo viciado, y que fue ciertamente informado al momento de firmar el formulario de afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Por otra parte, la A.F.P. COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. nunca estimó el valor de la pensión en uno u otro régimen para establecer si en realidad era más conveniente que el demandante se trasladara de régimen pensional, la A.F.P. COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A.. aprovechándose del principio de confianza legítima que recaía en su Institución y en sus asesores le hizo creer a mi representado simplemente que “era más conveniente” afiliarse a dicho régimen, y como quiera que mi representado CONFIO en la información que le estaban suministrando en ese momento, le dio toda la credibilidad a lo que el asesor afirmaba es hasta el año 2016 en el que se da cuenta que había sido engañada y que la información sobre su situación había sido errada.

El comparativo de los escenarios de pensión era totalmente procedente efectuarlo y elaborarlo por parte del fondo privado toda vez que para la fecha del traslado de régimen (**Febrero de 1995**) se encontraba vigente la Ley 100 de 1993 sin sus modificaciones, la cual estableció en el **artículo 34 la fórmula con la cual se le liquidaría** la pensión de vejez del demandante en el evento de que permaneciera en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, y a su vez ya se encontraba vigente el Decreto 1299 de 1994 para efectos de liquidación del bono pensional y se conocían las distintas variables actuariales, la expectativa de vida, las tablas de mortalidad entre otros para la proyección que correspondería en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en caso de que el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO se trasladara.

ARTICULO. 34.- Monto de la pensión de vejez. *“El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización el 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.*

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.”

De lo anterior se concluye que la pensión de vejez del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, era **“definido”** esto es tenía unos requisitos claros y comprobables por la A.F.P. COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. previo a que animara a el demandante al diligenciamiento de la afiliación; es así como el demandante con el solo hecho de completar 1.000 semanas cotizadas iba a acceder al **65% del promedio salarial sobre el cual cotizara en los últimos 10 años de cotización**, inclusive tenía la expectativa de que si decidía cotizar por un tiempo más, tenía la **ventaja y el beneficio** de que la tasa de reemplazo se incrementaría en un 2% por cada 50 semanas cotizadas, y que inclusive podía alcanzar una **tasa de reemplazo del 85%**.

Del análisis actuarial se puede colegir que las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P. PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS. indujeron en error al demandante al hacerle pensar y creer que la afiliación al Régimen de

Ahorro Individual con Solidaridad era lo que más le convenía, ya que como fue estudiado por un Actuario experto en el tema, nunca hubiese sido una buena opción o decisión dicho traslado para el caso particular del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, por el contrario era deber de las A.F.P. AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P. PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS Desanimarlo, sin embargo lo que hizo fue incentivar para que tomara una decisión errada.

Lo que se pretenderá demostrar dentro del proceso con el correspondiente calculo actuarial, sustentado por personas expertas e idóneas en el tema, es que las A.F.P. AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P. PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS a la fecha en que mi representado se vinculó a dicha administradora NO PODRÍA, NO ERA POSIBLE según los cálculos actuariales, ofrecerle UNA MEJOR OPCIÓN DE PENSIÓN a el demandante, inclusive, así empezara a cotizar sobre el tope de salarios permitido por la Ley, siempre la mejor opción para el demandante, sería continuar cotizando al seguro social y conseguir su pensión en dicho régimen.

De lo anterior se puede concluir que con el solo hecho de que el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO firmara el formulario de afiliación a las A.F.P. AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P. PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS, esto no significa que estuviera expresando una voluntad y consentimiento libre de todo vicio, sino más bien obedece al engaño efectuado por el asesor del fondo privado y que a través de información que no correspondía con la realidad logró persuadirla para que suscribiera el formulario de afiliación para trasladarse a un régimen de pensiones, su consentimiento estuvo viciado, para que el consentimiento o voluntad del demandante hubiese estado libre de vicios, como ha sido interpretado por la Corte Suprema de Justicia, para que esto ocurriera, era necesario establecer que *“el afiliado efectivamente recibió una asesoría clara e ilustración suficiente acerca de las ventajas y desventajas que representaba para él, el cambio de R.P.M. a R.A.I.S., la manera en que se pensionaría en el R.P.M. y en qué posible cuantía, el capital necesario que se requeriría en el R.A.I.S. para obtener al menos una pensión del 110% del salario mínimo, datos que eran posibles de mostrarle al futuro pensionado, así fuera aproximativamente”* en caso de que esta asesoría realmente se hubiese brindado a el demandante, no se hubiera trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y seguramente en el I.S.S., hubiera logrado una prestación definida y se hubiera beneficiado de todas las prerrogativas y requisitos propias de este régimen.

El perjuicio que se causó por la irresponsabilidad y por la falta de información por parte de **la Administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad** está valorado, y puede notarse de bulto en las liquidaciones que se efectuaron en la proyección pensional efectuada para el caso del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO y que reitero se anexan a la presente como prueba.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia se pronunció nuevamente sobre el tema en sentencias SL 19447 del 27 de septiembre de 2017 M.P: Dr. Gerardo Botero Zuluaga y SL 17595 del 18 de octubre de 2017, M.P. Dr. Fernando Castillo Cadena, reiterando la obligatoriedad de la información al futuro afiliado antes y durante la permanencia en el RAIS, so pena de declarar dicha afiliación INEFICAZ.

En consecuencia deberá declararse la NULIDAD o la INEFICACIA de la afiliación suscrita por el demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en consecuencia las AFP AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LAA.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS deberán trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

8. MEDIOS DE PRUEBA (NUMERAL 9, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

Solicito se decrete, practique y sean tenidas en cuenta a favor de la parte demandante, las siguientes pruebas que individualizo y concreto así:

8.1 DOCUMENTALES:

1. Copia de la Cédula de ciudadanía del demandante. (1 folio)
2. Copia de la solicitud radicada por el demandante ante la A.F.P. COLFONDOS. el día 05/12/2022 mediante la cual se solicitó la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por cuanto existió vicio en el consentimiento. (3 folios)
3. Copia de la solicitud radicada por el demandante ante la A.F.P. PORVENIR. el día 05/12/2022 mediante la cual se solicitó la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por cuanto existió vicio en el consentimiento. (3 folios)
4. Copia de la solicitud radicada por el demandante ante la A.F.P. PROTECCION. el día 05/12/2022 mediante la cual se solicitó la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por cuanto existió vicio en el consentimiento. (3 folios)
5. Copia de la solicitud radicada ante COLPENSIONES el día 05/12/2022 mediante la cual el demandante solicito la activación de su afiliación como quiera que existió vicio en el consentimiento al momento de afiliarse al R.A.I.S. (3 folios)

8.2. INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito se sirva citar al **representante legal o a quien haga sus veces, de la A.F.P. PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, para que absuelva el interrogatorio de parte que le formularé en audiencia, referente a las circunstancias en las cuales se prestó la asesoría a el demandante previo a la suscripción de la afiliación en el año 1995, y poder determinar si se tuvieron en cuenta las características especiales y particulares del señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO y si se cumplió con los deberes legales de información y asesoría al momento de la afiliación a la entidad administradora. Solicito respetuosamente se prevenga al Representante Legal de la **A.F.P. PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A.** que previo a la diligencia deberá enterarse del caso del demandante y ceñirse a lo que nos interesa en el presente proceso.

9. CUANTIA Y COMPETENCIA (NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 25 DEL C.P.T., Y ARTÍCULO 12 DEL C.P.T. MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 1395 DE 2010):

Por la naturaleza de la acción, al tratarse de una controversia referente al sistema de seguridad social integral que se suscita entre el demandante y las entidades administradoras de fondos de pensiones demandadas, en virtud de lo señalado en el **Numeral 4 del Artículo 2°** del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es usted señor juez competente para resolver sobre las pretensiones de esta demanda.

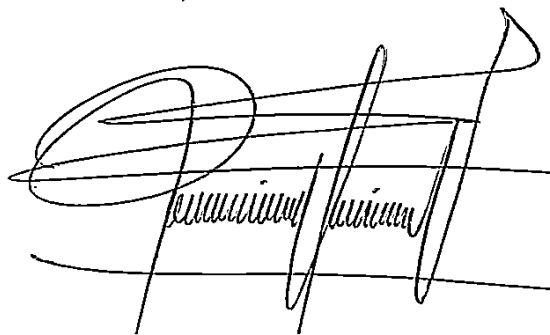
Así mismo es usted competente para conocer del proceso en 1ra instancia por la cuantía de las pretensiones, que estimo en \$ 660,220,965 pesos M/C, valor correspondiente al dinero contenido en la cuenta individual del demandante y teniendo en cuenta que la reclamación del derecho que se encuentra en controversia se solicitó en la ciudad de TUNJA, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 11 del C.P.T.S.S., es usted señor juez competente para conocer de este proceso en primera instancia.

10. ANEXOS (ARTÍCULO 26 DEL C.P.T. Y S.S.):

1. Poder debidamente otorgado.
2. Copia de la demanda para el traslado a las entidades demandadas.

3. Copia de la demanda para el traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, obrante en medio físico y en medio magnético (CD) el cual en cumplimiento del inciso 6 del artículo 612 del Código General del Proceso, contiene copia de la demanda y de sus anexos.
4. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
5. Certificado de existencia y representación legal de las AFP PORVENIR S.A PENSIONES Y CESANTIAS , A.F.P. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, Y LA A.F.P PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS con fecha de expedición no mayor a 60 días.
6. Tarjeta profesional del abogado.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yesid Mauricio Vega Peña', written over a set of horizontal lines.

YESID MAURICIO VEGA PEÑA
C.C. No. 80.009.582 de Bogotá
T.P. No. 216996 del C. S. de la J.